EL MUNDO

Un grupo de estudiantes independentistas intentan sabotear un acto de S'ha Acabat en la Universidad Autónoma de Barcelona el pasado noviembre. EUROPA PRESS

Los violentos que dominan las universidades catalanas

Govern y rectores permiten que el brazo estudiantil de la CUP impulse delaciones de profesores y acose a los constitucionalistas

VÍCTOR MONDELO BARCELONA

Las delaciones a profesores castellanohablantes, los ataques a los jóvenes constitucionalistas de S'ha Acabat o la manifestación ilegal contra el niño de Canet y su familia llevan la misma firma. Tras todos estos casos de acoso se encuentra el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), una organización muy cercana a Arran, el brazo juvenil de la CUP, que lleva años respondiendo con violencia a cualquier intento de combatir el pensamiento uniforme independentista en el ámbito educativo y en particular en los campus de Cataluña; y que, en los últimos tiempos, está logrando respaldo inequívoco de la Generalitat y los órganos de gobierno de las universidades.

Sus actos de señalamiento han encontrado amparo institucional coincidiendo con el *procés*, especialmente tras el 1-O. Sirva de ejemplo el episodio acaecido después de la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes separatistas, en el que la Universidad de Barcelona (UB) toleró la ocupación del vicerrectorado y el boicot de la actividad docente a manos de un grupo de encapuchados del SEPC. La propia universidad había allanado el camino a la protesta con un manifiesto a favor de los presos separatistas por el que acabó siendo condenada judicialmente por vulnerar la neutralidad ideológica.

El pasado año se produjo un punto de inflexión en la relación entre este grupúsculo secesionista y la Administración. En junio, los rectores de las ocho universidades públicas catalanas asumieron un «compromiso» ideado por el SEPC en el que se exigía extender la inmersión lingüística a los campus, «garantizando que el catalán es la lengua vehicular». Los rectores firmaron el documento tras ocupar encapuchados del sindicato separatista el rectorado de la UB y bloquear el acceso al centro con barricadas.

En septiembre, coincidiendo con el inicio del curso académico, sería el Govern quien ahondaría en el blanqueamiento de esta organización al obligar a las universidades a elaborar informes semestrales de «incidencias lingüísticas» para detectar qué profesores usaban el castellano en sus clases cuando se habían comprometido a impartirlas en catalán. Esta suerte de listas negras habían sido alentadas por el SEPC que, en paralelo, impulsó una web para facilitar la delación de estos docentes junto a la Plataforma per la Llengua y otro conocido sindicato estudiantil separatista, la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC), en el que en su día militaron dirigentes como Oriol Junqueras, Quim Forn, Josep Rull –todos ellos condenados por organizar el 1-O– o la actual presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie.

Las delaciones denunciadas en esa web se remiten a los rectorados para que, a su vez, las incorporen a los informes lingüísticos que acaban en poder del Departamento de Universidades de la Generalitat, que ya se jacta de estar usándolos para forzar a profesores castellanohablantes a impartir sus clases en catalán. Transcurrido el primer cuatrimestre del presente curso, el Govern asegura haber registrado 55 reclamaciones que, «en el 100% de los casos, han sido de estudiantes que habían escogido el catalán como lengua de docencia a la hora de formalizar su matrícula y que, al iniciar las clases, se vieron afectados por un cambio de lengua». «En el 60% de los casos verificados se ha podido restituir la lengua de impartición anunciada en el momento de la matrícula», dice la Consejería dirigida por Junts.

El SEPC está llevando a cabo la promoción de esta web de delaciones entre los universitarios de manera coordinada con la organización que espió a niños en los recreos y a través de campañas como una en la que un profesor ebrio se dirige a sus alumnos en español.

En la diana del SEPC está S'ha Acabat, la organización estudiantil fundada en 2018 para discutir al independentismo la apropiación del espacio universitario, y que sufre recurrentes ataques para impedir su sola presencia en los campus. Sólo hay que remontarse a finales de febrero para dar con la última de estas agresiones: miembros del brazo estudiantil de la CUP acorralaron a los jóvenes constitucionalistas por instalar una carpa en la Universidad Pompeu Fabra. Otra carpa levantada en la Universidad Autónoma de Barcelona en octubre también acabó derribada por integrantes del SEPC, que alegó estar combatiendo el «fascismo» y no encontró oposición de los Mossos.

La consejera del ramo, Gemma Geis, llamó a las universidades a dificultar la acción del constitucionalismo en los campus alegando que los politiza. «El Govern lamenta y condena la utilización política de los campus universitarios», zanjó la consejera al ser preguntada sobre qué medidas pensaba implementar para evitar nuevos ataques contra entidades constitucionalistas en las universidades de Cataluña.

Las autoridades toleraron el boicot a la actividad docente tras la sentencia del 1-O

En la diana del SEPC están los estudiantes constitucionalistas de S'ha Acabat

Separatistas destruyen una carpa constitucionalista en un campus el año pasado. E. M.